



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

Dictamen Jurídico

Número:

Referencia: EX-2025-81790312- -APN-SIGEN NO-2025-80238308-APN-CCYCE#MCH - Coordinación de Compras y Contrataciones de Educación del Ministerio de Capital Humano- Decreto N° 202-2017 - DDJJ de Intereses.

I.- Ingresan a esta Asesoría las actuaciones de la referencia, iniciadas mediante la NO-2025-80238308-APN-CCYCE#MCH (orden N° 2) suscripta por un asistente administrativo de la Coordinación de Compras y Contrataciones de la Sec. de Educación del Ministerio de Capital Humano, donde informa a esta Sindicatura General de la Nación que *“de conformidad con lo dispuesto por el artículo 4° del Decreto 202/17, ... CORREO OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA S.A.(C.U.I.T 30-70857483-6) en su Declaración Jurada de Intereses manifiesta vinculo positivo entre la Directora de dicha sociedad (Gladys Noemi Humenuk) y el Sr. Presidente de la Nación, la que fue presentada en el marco del proceso de compra N° 82-0007-LPR25 que tramita por EX-2025-62696927- -APN-CCYCE#MCH y cuyo objeto es la contratación del servicio de distribución y repliegue de materiales utilizados para la efectiva implementación del Estudio Regional Comparativo y Explicativo 2025 (ERCE)”*.

En tal presentación también menciona que *“el 15/07/2025 se realizó el acto de apertura de ofertas a través del sistema COMPR.AR y teniendo en consideración que se presentó más de una oferta, y en cumplimiento del periodo de vista, el expediente de trámite fue remitido a la Comisión Evaluadora de Ofertas con fecha el 18/07/2025.”*, y acompaña en forma embebida la siguiente documentación:

- Declaración Jurada de Intereses presentada por CORREO OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA S.A. (CE-2025-76366990-APN-DPPT#OA y RE-2025-76370945-APN-DNCBYS#JGM) ambas del 15 de julio de 2025, suscriptas por el Representante Legal de la oferente.
- Disposición de la Subsecretaría de Gestión Administrativa de Educación DI-2025-114-APN-SSGAE#MCH del 3 de julio de 2025 que autoriza la convocatoria de oferentes y aprueba el pliego de la Licitación Privada N° 82-0007-LPR25, para la contratación del servicio de distribución y repliegue de materiales utilizados para la efectiva implementación del Estudio Regional Comparativo y Explicativo 2025 (ERCE), solicitada por la DIRECCIÓN NACIONAL DE EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES Y ENSEÑANZA dependiente de la SUBSECRETARÍA DE INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN

EDUCATIVA de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.

II.- Posteriormente, mediante PV-2025-85803919-APN-GCSS#SIGEN (Orden N° 6), la Subgerencia de Control del Sector Social entiende que *“En la inteligencia que la comunicación de la Coordinación de Compras y Contrataciones de Educación del Ministerio de Capital Humano resulta un asunto que, como consecuencia del ejercicio de las competencias de la Sindicatura General de la Nación, requiere del parecer u opinión de esa Gerencia de Asuntos Jurídicos, se remite el presente para su conocimiento y a los efectos otorgarle prosecución al trámite”*

III.- Analizada la cuestión, cabe señalar que la normativa vinculada a la NO-2025-80238308-APN-CCYCE#MCH (orden N° 2) y sus archivos embebidos, es el Decreto N° 202/2017 –Conflicto de Interés.

Cabe recordar que el Decreto N° 202/2017 en su artículo 1° establece la obligatoriedad para toda persona que se presente en un proceso de contratación o de otorgamiento de una licencia, permiso, autorización, habilitación o derecho real sobre un bien de dominio público o privado del Estado a presentar una “declaración jurada de intereses”.

En el supuesto de tratarse de una persona jurídica deberá declarar los vínculos de amistad, parentesco, pleitos, deudas, acreencias, o sociedad o comunidad con el Presidente, Vicepresidente, Jefe de Gabinete de Ministros y demás Ministros y autoridades de igual rango en el P.E.N., que tengan sus directores o accionistas con capacidad de formar la voluntad social o de ejercer una influencia dominante como consecuencia de sus acciones, cuotas o partes de interés poseídas.

En el caso que nos ocupa, se trata de una empresa estatal, en la que uno de sus Directores declara la existencia de amistad pública con el Presidente de la Nación.

Al respecto, entiende este servicio jurídico que las tareas desempeñadas por quienes resultan propuestos en los Directorios de empresas públicas no implican el ejercicio de una actividad privada o la gestión de un interés privado, sino la gestión del interés público.

Es que, tal como lo indica la Procuración del Tesoro son funcionarios públicos los directivos o empleados que representan al Estado en las Sociedades Anónimas con Participación Estatal -mayoritaria o minoritaria-, los de las Sociedades del Estado, los de las Empresas del Estado, los de las Sociedades de Economía Mixta y, en suma, todos aquellos que actúen por y para el Estado, cualquiera sea la entidad total o parcialmente estatal en la que lo hagan y el régimen jurídico laboral o contractual que se aplique a su relación con el Estado (Dictamen S/N - 2001 - Tomo: 236, Página: 477)

Así, no se advierte conflicto de intereses entre la gestión del Director de una entidad estatal y la participación de ésta en un procedimiento de contratación llevado a cabo por el mismo Estado.

A mayor abundamiento, recuérdese que mediante la Circular N° 1/2020 la OFICINA ANTICORRUPCION indicó que *“...El organismo o entidad, en cuyo ámbito se desarrolle un procedimiento alcanzado por el Decreto N° 202/2017, que reciba una “Declaración Jurada de Intereses” donde se consigne como vínculo la integración del órgano de gobierno de una persona jurídica a propuesta del FGS-ANSES por parte de un funcionario público comprendido en dicha norma, no se halla obligado/a a la aplicación de los trámites y procedimientos previstos en el artículo 4° de dicho Decreto”*.

Ello, agrega la Oficina, sin perjuicio de que *“...cada organismo o entidad podrá adoptar las medidas adicionales*

de transparencia que estime pertinentes, por encima de los estándares mínimos obligatorios en materia de compras y contrataciones públicas, para evitar situaciones equívocas que generen en la ciudadanía en general, y en el resto de los participantes en el proceso en particular, un temor cierto de afectación de la imparcialidad de las decisiones que se adopten.

IV.- Con lo expuesto, se remite el presente a la Gerencia de Control Sector Social.